

BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 279		FECHA: 5 de Febrero de 2018
SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	NºPÁG.
AMÉRICA LATINA	2018, EL AÑO DE LAS IZQUIERDAS POSIBLES EN AMÉRICA LATINA 8 COMENTARIOS	2
	LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE EE. UU. Y SU IMPACTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	5
BOLIVIA	BOLIVIA A CONTRACORRIENTE	8
COLOMBIA	GAVIRIA OCAMPO: "CERCA DEL 40% DEL PRESUPUESTO DE COLOMBIA SE DESTINA A GUERRA Y DEUDA"	9
ECUADOR	LA PASTILLA AZUL DE LENÍN BOLTAIRE MORENO	11
EL SALVADOR	ALIMENTACIÓN SALUDABLE SE EXPANDE POR LAS ESCUELAS SALVADOREÑAS	13
HONDURAS	APOYADAS POR EEUU. FUERZAS DE SEGURIDAD SIGUEN ASESINANDO MANIFESTANTES	15
MÉXICO	CRISIS TOTAL, AMLO Y EL 2018	16
NICARAGUA	POLÍTICAS DE TRUMP PROMUEVEN MÁS REMESAS HACIA NICARAGUA	17
PANAMÁ	¡NEUTRALIDAD, SÍ!, ¡MANIOBRAS MILITARES NO!	18
PERÚ	LA LUCHA POLÍTICA EN EL PERÚ, LA IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA	19
VENEZUELA	¿ESTÁ EN MARCHA LA FASE FINAL DEL ASEDIO A VENEZUELA?	21
	LA MESA DE DIÁLOGO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA.	23

AMÉRICA LATINA

2018, EL AÑO DE LAS IZQUIERDAS POSIBLES EN AMÉRICA LATINA 8 COMENTARIOS

Los 9 años transcurridos entre 2009 y 2017 nos han dejado una contraofensiva conservadora contra los gobiernos progresistas de la región. Los diferentes proyectos progresistas, de izquierda y/o nacional-populares, que se incorporaron al ciclo abierto por el Comandante Chávez en 1998, llegaron a acumular al mismo tiempo 11 gobiernos en el conjunto de América Latina y el Caribe.

2018, el año de las izquierdas posibles en América Latina

Sin embargo, el golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras en 2009, el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012, el impeachment contra Dilma en Brasil en 2016, y la victoria electoral de Macri en Argentina (el único gobierno de izquierda perdido en las urnas) lograron cristalizar parcialmente el intento de restauración conservadora. Si a ello le sumamos la manipulación informativa que se da contra los gobiernos actuales, como Venezuela o Bolivia, y la persecución judicial contra ex mandatarios como Lula en Brasil y Cristina en Argentina, el panorama se complica. Aun más si añadimos que en ocasiones ni siquiera hace falta que la derecha llegue al poder mediante la vía electoral o el golpe, si no que los propios sucesores de los grandes líderes se convierten en caballos de troya, como es el caso de Ecuador donde el gobierno de Lenin Moreno ha destituido al Vicepresidente Jorge Glas, y maniobra en el ámbito político-electoral para impedir una futura reelección de Rafael Correa.

Los últimos meses de 2017 sintetizan la nueva etapa del ciclo progresista en América Latina: fraude electoral descarado en Honduras; indulto a Fujimori por un Kuczynski cuestionado tras haber recibido cantidades millonarias de la constructora brasileña Odebrecht; y victoria de Piñera en Chile a pesar de que el conjunto del centro-izquierda había superado el 50% de los votos en primera vuelta, en un país que mantiene vigente la Constitución de Pinochet.

En todos los casos citados podemos encontrar motivos estructurales y debilidades de los gobiernos progresistas (no siempre las mismas), que han sido explotadas por la derecha para hacerse con el poder: un Estado herencia del neoliberalismo que solo ha sido reformado parcialmente y que cuenta con una institucionalidad débil; ausencia de un partido que controle el territorio, y en muchos casos, sustitución del partido por el Estado; falta de formación política y de cuadros dirigentes; corrupción inherente a cualquier espacio de poder amplificada por los oligopolios mediáticos; incapacidad para construir herramientas que disputen la batalla mediática en igualdad de condiciones; y un largo etcétera de debilidades lógicas en procesos que rondan la década de existencia y que, al contrario que la revolución cubana, no tiraron abajo el Estado para construir uno nuevo (también con debilidades, pero nuevo al fin y al cabo), sino que construyen sobre los cimientos del anterior. Y a veces los cimientos son más sólidos de lo que parece.

Sin embargo, y a pesar de la necesaria autocrítica que debe hacerse, todos estos procesos lograron, en mayor o menor medida, recuperar el Estado de la devastación neoliberal, y avanzar hacia un escenario de derechos y justicia social, redistribuyendo la riqueza y reduciendo la desigualdad.

6 procesos electorales en 2018

El año que comienza va a ser fundamental para determinar si se logra remontar y consolidar el ciclo progresista en la región, o la vieja-nueva derecha avanza posiciones y conquista más espacios de poder, en este caso alguno de los 6 gobiernos que serán electos durante los próximos 12 meses.

Costa Rica el 4 de febrero, Paraguay el 22 de abril, Colombia el 27 de mayo (con una más que posible segunda vuelta el 17 de junio), México el 1 de julio, Brasil el 7 de octubre (la posible segunda vuelta sería el 28 de ese mismo mes) y Venezuela con una fecha por definir, pero con total seguridad antes de diciembre, son los 6 escenarios de disputa geopolítica electoral para 2018.

También en El Salvador el 4 de marzo se realizarán elecciones municipales y parlamentarias, que pueden ser un indicador de la fortaleza del FMLN de cara a las presidenciales de 2019.

Si bien sería importante el triunfo del centro-izquierda del Frente Amplio en Costa Rica, y en Paraguay de la Alianza (Ganar) entre el Partido Liberal Radical Auténtico (quien pone el candidato a Presidente, Efraín Alegre) y el Frente Guasú de Fernando Lugo (que coloca a Leo Rubín como candidato a Vicepresidente), probablemente son las otras 4 elecciones presidenciales (sumadas a las de Bolivia y Argentina en 2019) las que van a determinar el rumbo de la región en los próximos años.

México, ¿la tercera es la vencida?

Por su locación geopolítica, el país que muchos califican como frontera sur de los Estados Unidos, nunca gobernado por la izquierda, es la elección más importante de 2018 para Nuestra América.

También para México es probablemente la elección más importante de su historia electoral, pues además de la Presidencia de la República, el 1 de julio se eligen 128 senadurías, 500 diputaciones y 9 gobernaciones (entre ellas una fundamental como es la de la Ciudad de México), además de centenares de cargos locales.

Y por tercera vez Andrés Manuel López Obrador, el candidato de una amplia alianza con raíces en la tradición del nacionalismo revolucionario de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, además de la izquierda del PT, y un sector de la derecha como el PES (Partido Encuentro Social), se presenta como favorito en todas las encuestas[1] para ganar una elección donde puede pesar más que nunca el descontento ciudadano hacia la clase política tradicional.

Enfrente tendrá a José Antonio Meade, postulado por el PRI, que ha tenido que recurrir al candidato menos priista de todos sus candidatos (un tecnócrata que ha tenido altos cargos en diferentes administraciones del PRI y del PAN).

Asimismo, el tercero en discordia es Ricardo Anaya, candidato de una coalición anti natura entre la derecha del PAN y la ex izquierda del PRD que, después de enterrar el proyecto histórico para el que nació, va de comparsa del partido de Vicente Fox y Felipe Calderón. El mayor peligro es que logre instaurar en el electorado no politizado el mensaje de centralidad frente a los “extremos”, el PRI y Morena.

También es necesario destacar la presencia de otros candidatos y candidatas como Marichuy, la vocera del CNI y EZLN, que a pesar de que previsiblemente no logre reunir las firmas necesarias para poder postularse, es importante el recorrido que está haciendo por el país, llevando la voz de los sin voz. Quienes sí parece reunirán las firmas para presentarse como candidatos independientes son la ex panista y esposa[2] de Felipe Calderón, Margarita Zavala, y el ex priista y Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”. Los porcentajes de votación que puedan arañar estas candidaturas independientes podrían ser determinantes para el resultado final.

El escenario de la contienda electoral no es sencillo. Un gobierno en horas bajas acosado por escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos durante todo el sexenio; una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Canadá y la administración Trump, favorable incluso a romper el acuerdo; violencia estructural, con el narco cada vez enraizado en economía mexicana y 40 periodistas asesinados durante el sexenio de Peña Nieto; y una Ley de Seguridad Interior que permite entregar el control de la seguridad interna a las Fuerzas Armadas en un escenario de por ejemplo, protestas populares ante un posible fraude electoral al más puro estilo Honduras.

Ante eso, López Obrador se ha rodeado de un equipo donde destacan varios nombres como Esteban Moctezuma, ex secretario de Gobernación de Zedillo; Víctor Villalobos, denunciado por Greenpeace[3] y otras organizaciones por ser un hombre de Monsanto y los transgénicos; o su coordinador de programa, y estrategia de campaña, Alfonso Romo, empresario vinculado en el pasado con Pinochet[4].

La apuesta es clara, pragmatismo para ganar (y, sobre todo, que las élites económicas que gobiernan México, y los Estados Unidos, te permitan hacerlo), sin sacrificar el horizonte del proyecto político. Un gobierno de López Obrador, aun desde la moderación, que combata frontalmente la corrupción, afronte de verdad el problema del narco, redistribuya la riqueza mejorando las condiciones materiales de los sectores populares, y recupere la soberanía en política exterior, sería una importantísimo avance para todo América Latina y el Caribe.

Brasil, ¿elecciones sin Lula?

Todo parece indicar que, tras el impeachment contra Dilma, y después de meses donde Lula aparece primero en todas las encuestas, el 24 de enero se va a consumir el golpe parlamentario, judicial y mediático, si como todo parece indicar Lula es finalmente condenado (sin una sola prueba) en segunda instancia, y, por lo tanto, inhabilitado para volver a postularse como candidato.

En ese caso, el PT y sus aliados de izquierda, como el PCdoB, tienen la tarea de ganar con otro candidato o candidata que no sean Lula o Dilma, con la enseñanza aprendida de que si llegan de nuevo al gobierno no se puede pactar con las élites económicas ni el agronegocio esperando que no te traicionen.

Todo ello en un escenario de alta complejidad social donde el segundo candidato con mejor intención de voto es Jair Messias Bolsonaro, un ex militar de ultraderecha, la versión brasileira de Trump o Le Pen.

Venezuela, ofensiva chavista

2017 ha sido el año de la contraofensiva chavista, en el país donde la lucha de clases se expresa de manera más descarnada en forma de chavismo contra antichavismo.

Es probable que las elecciones sean convocadas lo antes posible, una vez terminen las negociaciones entre oficialismo y oposición en República Dominicana. La victoria en las sucesivas elecciones, Asamblea Constituyente, Gobernaciones (19 de 23) y Alcaldías (más del 90% para el PSUV y fuerzas aliadas), así como la fragmentación y división opositora (entre quienes apuestan por el diálogo y quienes lo hacen por la violencia), permiten avizorar un escenario de recuperación para el chavismo.

Aun así, garantizar la cohesión de las Fuerzas Armadas (eslabón que intenta romper la oposición y el imperialismo), lucha frontal contra la corrupción, y el mayor desafío de todos, recuperación económica después del terrorismo político, económico y mediático sufrido por la Revolución Bolivariana tras la muerte de Chávez, son los principales desafíos de un proyecto que seguirá teniendo a Nicolás Maduro (el mejor Canciller que ha tenido el ALBA, el mejor Presidente que pudo dejar Chávez a cargo) al frente.

Colombia, consolidar la paz

Mientras tanto en Colombia se juega mucho más que la presidencia del país. En las primeras elecciones tras los Acuerdos de La Habana, la antigua guerrilla de las FARC-EP, ahora Fuerza Armada Revolucionaria del Común, se presenta a unas elecciones que no va a ganar, pero donde es necesario posicionar el discurso de la paz y la exigencia de cumplimiento de los acuerdos. Suman más de 30 ex combatientes de las FARC-EP asesinados desde la firma de la Paz, y un largo número de acuerdos todavía por cumplir en esta fase de posconflicto, como la amnistía para los más 600 presos y presas políticas farianas.

En ese escenario, son numerosos los candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones, y todavía incierto el desenlace.

El peor escenario posible, una segunda vuelta entre el candidato del uribismo, Iván Duque, y el ex Vicepresidente de Santos, Germán Vargas Lleras, que ha mostrado públicamente su discrepancia con algunos puntos de los Acuerdos de La Habana. Este escenario sería ciertamente peor que el de las anteriores elecciones presidenciales, cuando hubo que escoger entre el uribista Zuluaga, y el ex Ministro de Defensa de Uribe, y actual Presidente, Juan Manuel Santos.

Otro escenario podría ser el de Vargas Lleras, apoyado por el uribismo, frente a una alianza más amplia como la que se está conformando en torno al ex Alcalde de Medellín y ex Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con el apoyo del Polo Democrático y el Partido Verde (Jorge Enrique Robledo y Claudia López serían candidatos al Senado por la Coalición Colombia).

En este contexto, será determinante el discurso y el porcentaje de votos que puedan obtener en primera vuelta no solo las FARC, si no otros candidatos como el ex Jefe Negociador de Santos en La Habana, Humberto de La Calle, avalado por el Partido Liberal, o la defensora de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba, que ha reunido las firmas necesarias para ser candidata independiente, así como Gustavo Petro, ex Alcalde de Bogotá, que podría terminar sumándose al bloque de Fajardo.

Las izquierdas posibles

En la mayor parte de los escenarios electorales que hemos repasado, las candidaturas son la izquierda posible en cada lugar y momento histórico.

Con excepción de Cuba (cuya Asamblea Nacional del Poder Popular también escogerá Presidente de la República el 19 de abril), donde 59 años después de su triunfo, se sigue construyendo una revolución socialista, en el resto de América Latina, la por otra parte única región en el mundo donde se construyen escenarios posneoliberales, es necesario seguir apoyando las alternativas posibles de izquierda para hacer frente al auge, en otras parte del continente y el planeta, del populismo de derecha que legitima las políticas criminales de Estados Unidos y la Unión Europea, en lo económico terminando de desmontar, con la complicidad de la socialdemocracia, las conquistas sociales de la clase obrera; y levantando muros, físicos o mentales, que legitiman el racismo y la xenofobia. Todo ello amparado un brazo armado, la OTAN, que abre paso al saqueo de los recursos naturales de los países de Medio Oriente, provocando un círculo vicioso de bombardeos, muertes, migraciones y más muertes en las fronteras, como la invisible del Mar Mediterráneo.

Mientras tanto, el desafío para estas izquierdas posibles es el de construir alternativas al capitalismo en el ámbito económico, donde la apuesta es la uberización de la economía, la desregularización total de la misma (excepto cuando necesiten al Estado para desmontan las conquistas del ciclo progresista); pero sobre todo, construir alternativas en el ámbito cultural, disputar la hegemonía capitalista en el ámbito cultural (y mediático) para construir pueblo y no ciudadanos consumidores diluidos en la falsa ilusión de la clase media.

Todo ello en un mundo devorado por el penúltimo intento de Estados Unidos por mantener su hegemonía y donde la victoria de Trump (que a pesar de las amenazas vía Twitter y su vergonzosa política hacia Cuba o Palestina, hasta el momento ha provocado menos guerras que Obama y Hillary Clinton) solo es un síntoma de la época que nos ha tocado vivir, y de una enfermedad llamada capitalismo.

Fuente: Katu Arkonada. TeleSur

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE EE. UU. Y SU IMPACTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El primer pilar de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del gobierno de Donald Trump es proteger a la patria. En este pilar, la migración se presenta como una de las amenazas fundamentales.

- Se proseguirá con el reforzamiento del control de las fronteras y la reforma del sistema migratorio. Es de esperar que continúe la beligerancia hacia los migrantes latinos en EE. UU.
- El objetivo es “atacar al problema en su origen”: aumentarán así las restricciones a los derechos adquiridos por los migrantes ya instalados en EE. UU., o por aquellos potenciales migrantes desde las sociedades de origen. La válvula de escape que mitiga la presión social por la vía de la salida individual en el hecho migratorio, podría obstruirse.

- El resultado: una mayor inestabilidad política y escenarios todavía más explosivos en Centroamérica, donde los conflictos sociales derivados de la falta de horizonte vital se sumarían a las altas dosis de violencia producto de la delincuencia común, la alianza del crimen organizado con sectores estatales (políticos y/o policiales-militares), y la represión política heredera de una estrategia contrainsurgente de factura estadounidense. México seguirá siendo pieza fundamental en la detención de migrantes.
- El atacar las amenazas en su origen, pueden incluir a Cuba y Venezuela , catalogadas como gobiernos “enemigos”, porque se aferran a “modelos autoritarios de una izquierda anacrónica que continúan fallando a su gente”. Su peligro no es sólo dichos modelos sino el respaldo que reciben de China y Rusia, los principales retadores hegemónicos de EE. UU., de ahí que establezca en el ESN como acción prioritaria “aislar” a Cuba y Venezuela.
- Las presiones para que Cuba “modernice” su sistema (esto es, abrace el capitalismo) seguirán, máxime en un contexto de elecciones parlamentarias que seguramente supongan el relevo de Raúl Castro en la presidencia del país. EE. UU. tratará de presionar para que dicho relevo se acompañe de un cambio de sistema, unos esfuerzos que parecen abocados al fracaso pues en su estrategia de “línea dura” e intransigencia hacia Cuba, Trump no está acompañado por buena parte del establishment económico y político de su país, deseoso de normalizar relaciones con la isla.
- Con respecto a Venezuela, se espera la aplicación de una mayor presión económica, en el tira y afloje entre sectores de la derecha republicana conservadora y el lobby petrolero.
- Considerando que es año de elecciones presidenciales en Venezuela, organismos como la OEA redoblarán su campaña en contra del proceso de cambio, asociado a los múltiples think tanks que vienen elaborando opinión experta que luego pasa a alimentar a los medios de información hegemónica, condicionando la opinión pública. Seguirá latente la búsqueda de apoyo de países aliados como México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú para la conformación de un bloque multilateral y la imposición de una agenda regional que se podría articular por la OEA y/o por la Alianza del Pacífico.
- No hay claridad sobre una posible intervención militar. Sin embargo, el Comando Sur viene advirtiendo acerca de la necesidad de intervenir ante “crisis humanitarias” y ha realizado ejercicios militares en los países fronterizos

Este primer pilar de la ESN, incluye redoblar los esfuerzos para proteger la infraestructura crítica y redes digitales. Las ciberamenazas son un enemigo a combatir.

- A la vanguardia en este rubro están las empresas de ciberseguridad del complejo industrial militar israelí, estrechamente vinculadas a empresas de seguridad estadounidenses. Los países que en los últimos años muestran algún avance en lo relativo a medidas de ciberseguridad (sea en materia legal, mediante la compra de insumos o la adquisición de cursos de entrenamiento), son México, Brasil, Colombia y Argentina. Para 2018 puede esperarse un mayor desarrollo de este sector, que, entre otras cuestiones, implica la ampliación del espionaje cibernético y un mayor control de este ámbito (fundamental para la seguridad nacional) por parte de empresas israelíes y estadounidenses.

El segundo pilar de la ESN, es “promover la prosperidad estadounidense”, el “America First” . Uno de los objetivos es lograr tratados comerciales “justos” para EE. UU.

- Respecto al TLCAN las negociaciones siguen y no hay certidumbre al respecto. Los puntos importantes son la cancelación del capítulo de resolución de controversias, la revisión de aranceles para manufacturas y sobre todo la de automóviles y partes de automóviles. Este será uno de los puntos cruciales en la agenda bilateral en 2018.
- Según informe, del TLCAN dependen 5 millones de puestos de trabajo en EE. UU . Sectores vinculados a este Tratado, como el automotriz o el agrícola, ya han comenzado a cabildear en el Congreso para evitar el refrendo que esta institución debería dar a una hipotética decisión

presidencial de salida del TLCAN que, no obstante, no podría ser inmediata pues tardaría seis meses en hacerse efectiva.

- La eventual salida del TLCAN por parte de EE. UU. no resuelve el problema que se le plantea al país: garantizar la seguridad y prosperidad económica estadounidense conteniendo la pujanza de potencias económicas como China, que le disputan mercados pero también hegemonía geopolítica, sin los instrumentos multilaterales diseñados para tal efecto (recordemos que en enero de 2017 EE. UU. abandonó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica -TPP-) Una ampliación de la Alianza del Pacífico, buscando socios entre los países latinoamericanos anteriormente opositores como Ecuador, podría coadyuvar a recuperar influencia y proyección comercial hacia una de las regiones más pobladas del planeta a través de un instrumento donde EE. UU. ejerce su poder de manera interpuesta.

- Las decisiones tomadas en EE. UU. respecto al TLCAN y la ampliación del muro fronterizo (que podría retomarse como un elemento propagandístico que serviría de presión política hacia el Gobierno mexicano, más que como un hecho tangible) tendrán repercusiones en el proceso electoral mexicano y marcarán parte de la agenda de los candidatos presidenciales.

- Otro objetivo de este segundo pilar es lograr el “dominio” de EE. UU. en el área energética para garantizar que los mercados internacionales sigan estando abiertos . Esto es de especial importancia para América Latina y el Caribe, donde el sector público-privado estadounidense, buscará mejores condiciones para la expansión de las compañías de hidrocarburos. Actualmente, las petroleras estadounidenses están invirtiendo prioritariamente en México, Colombia, Argentina, Brasil y Perú. Se percibe una especial inclinación hacia Brasil, México y Argentina, países que vienen implementando un proceso de apertura del sector. Las principales empresas en el rubro: ExxonMobil, Chevron, Anadarko, Murphy Oil, BlackRock Inc. and First Reserve Corp, Conoco Phillips.

- En esa línea, se buscará garantizar la apertura de mercados, persistiendo las tensiones con Cuba y Venezuela, pues según la ESN, son países que deberían implementar reformas económicas para liberalizar el mercado, que garanticen “oportunidades económicas para todos y mejorar la gobernabilidad”.

- Esta expansión del sector energético es impulsada por agencias gubernamentales. El rol de EXIMBANK (Banco de Importaciones y Exportaciones) y OPIC (Corporación para la Inversión Privada en el Exterior) se revela como clave en este ámbito. Habrá que seguir los proyectos dirigidos desde estos organismos, en particular en el ámbito de energías renovables y con especial atención en el Caribe como contrapeso de Petrocaribe.

El tercer pilar de la ESN es “Preservar la paz mediante la fortaleza”. Se espera “reconstruir la fortaleza militar EE. UU.”

- Se propone un incremento de 54 mil millones de dólares en defensa para 2018 (el 9 % de aumento para el presupuesto militar), superando el presupuesto asignado durante el anterior Gobierno, a expensas de un recorte de 37.6 mil millones en asistencia diplomática y exterior. Prevalecerán la venta y préstamos militares, en lugar de subvenciones.

- El 6 de enero de 2018, se anunció la compra de armamento militar por más de 98 millones de dólares para México, la compra estuvo avalada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado y será usado para la “defensa nacional” mexicana y la lucha contra el “crimen internacional” .

El cuarto y último pilar se refiere a la capacidad de “influencia” de EE. UU. Este “último lugar” coincide con el paso de la asistencia bilateral (por ejemplo, vía USAID) como uno de los ejes clave de política exterior, a un mayor protagonismo para negocios e inversiones del sector privado.

- México seguirá recibiendo asistencia, aunque los montos se reducirán significativamente, se calcula en 87 millones de dólares. Más de la mitad del presupuesto estará destinado a combate al narcotráfico, operaciones de estabilidad y reforma al sector de Seguridad, y Crimen Transnacional.

- En el caso de Colombia (hasta ahora principal receptor junto con México de asistencia militar y “para el desarrollo”) se prevé para 2018 una ayuda de 251 millones de dólares. El 75 % es para el programa de seguridad y paz, poco más de 44 millones se destinará a Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad . Será fundamental atender al vínculo Colombia-EEUU, pues en 2018 se llevan a cabo elecciones legislativas y presidenciales, en un país que forma parte del cerco militar hacia Venezuela. Estados Unidos tiene ahí sus bases más importantes y de respuesta rápida.
- Guatemala, El Salvador y Honduras forman parte de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica (IRSA). La asistencia ha sido reducida. En conjunto, Centroamérica recibirá poco más de 4 millones de dólares en asistencia militar y policial, de la cual el programa Educación y Entrenamiento Militar Internacional absorbe casi la totalidad del presupuesto. Aparte, se presupuestaron 202 millones de dólares para asistencia humanitaria y para el desarrollo . Guatemala recibirá 80 millones, El Salvador 43 millones y Honduras 67 millones de dólares. Para los tres países, la mayoría de los fondos serán destinados a democracia, derechos humanos y gobernabilidad.
- En el caso de Perú, que se encuentra entre los principales receptores de asistencia militar de EE. UU., la ayuda para 2018 será de 49 millones de dólares, de los cuales 48 serán para el proyecto Seguridad y Paz. Este proyecto comprende la lucha contra el narcotráfico en una zona que no ha sido enteramente controlada por el Estado peruano y con remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso, que junto con las FARC, es considerada por el Comando Sur de EE. UU. como fuente potencial de terrorismo . Esto, en un contexto en el que se ha incrementado la instalación de bases militares en la selva peruana. Colombia y Perú conforman la “media luna” militar contra Venezuela.
- El recorte sustancial a la asistencia bilateral no implica el desinterés o la retirada de EE. UU. de América Latina. De acuerdo a las premisas del “America First” y las actividades de las multinacionales de EE. UU. en la región, es probable que los recursos sigan fluyendo, pero con mayor protagonismo del sector privado (empresas, fundaciones, corporaciones empresariales e incluso algunas ONG) así como a través de Instituciones Financieras Internacionales y regionales (tercerización de la asistencia).
- Los recortes en asistencia para la seguridad y militar serán suplidos por préstamos y ventas. Se trata de “desplazar una parte de la asistencia militar extranjera de subvenciones a préstamos con el fin de reducir los costos para los contribuyentes de EE. UU.” .

Fuente: Silvina M. Romano, Arantxa Tirado y Aníbal García Fernández. CELAG

BOLIVIA

BOLIVIA A CONTRACORRIENTE

El 22 de enero, se celebró el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta fecha, el presidente realiza su Informe ante la Asamblea Nacional, las distintas autoridades del Estado, el cuerpo diplomático, los movimientos sociales y la ciudadanía en general. Junto con la rendición de cuentas, el Informe del presidente sirve para dar inicio al nuevo período legislativo y marcar las pautas por las que transitará el Gobierno en los próximos años. En la rendición de cuentas, los datos sobre los cambios acaecidos en el país en los últimos doce años inundan el texto, dejando evidencia de la transformación política, social y económica del país durante el Gobierno de Morales. Pero además, el Informe contiene las pautas que definen la senda por la que transitará la gestión de Gobierno en los próximos años y es lo que se revisa en el presente texto.

Una idea quedó clara en el trazado de la ruta: Bolivia nada a contracorriente de la marea neoliberal que parece inundar la región en la última época. Argentina, Brasil, Paraguay y también Ecuador, con el presidente Moreno, cambiaron de rumbo en los últimos años; mientras que Chile o Perú han

redoblado su apuesta por la salida a la derecha. Bolivia sigue el rumbo que hace más de doce años le indicó el pueblo y que tantos éxitos –en lo económico y en lo social- ha llevado, mejorando significativamente las condiciones de vida de la gran mayoría de la población.

La opción de Bolivia es clara: seguir fortaleciendo la economía nacional como mecanismo de ampliación de derechos sociales y económicos. Frente a la apuesta de los países vecinos por la apertura comercial descontrolada, Bolivia redobla la suya por la producción nacional y la industrialización. Frente a la dependencia de la Inversión Extranjera Directa, Bolivia apuesta por la Inversión Pública. Frente al crecimiento exógeno de la economía, fortalecimiento de la demanda interna. Frente a la arremetida privatizadora que recorre la región, más soberanía y gestión pública de los recursos estratégicos del país.

Los cinco grandes desafíos anunciados ayer dejan claros los pilares sobre los que se debe seguir construyendo el modelo de desarrollo boliviano:

El primero de ellos es la industrialización, que se constituye como el principal eje que articula al resto. En este sentido, ya se ha avanzado en proyectos como los referentes a las primeras fases de la industrialización de recursos evaporíticos, o aquellos ligados al sector de los hidrocarburos, pero aún queda camino por andar en la industrialización de los recursos nacionales.

El segundo gran eje se refiere al mercado laboral, y en concreto a la necesidad de mejorar tanto las condiciones laborales como las posibilidades de acceso de los jóvenes al empleo, mediante programas de capacitación y orientación.

El tercer eje va relacionado con la mejora del sistema de salud, mediante la construcción de nuevos hospitales, el fortalecimiento de la capacitación y la puesta en marcha del Seguro Universal de Salud. Una vez más, queda clara la divergencia con el trazado marcado por países vecinos, que están apostando por la privatización a gran escala de los sistemas de salud.

El cuarto eje es el de la educación y el objetivo de elevar su calidad y la tecnificación.

Por último, el quinto eje enuncia el objetivo de lograr una justicia ágil, gratuita y transparente.

Esa es la vía de Bolivia para seguir construyendo su modelo de desarrollo económico y social. Seguramente hoy los economistas ortodoxos de páginas color salmón se echarán las manos a la cabeza por la apuesta del presidente Evo Morales y su equipo económico, pero olvidan – conscientemente- que la economía boliviana no es solo la más inclusiva de la región, sino que también, en las grandes variables macroeconómicas, es líder indiscutible desde hace años. El éxito de la apuesta no puede ser discutido a tenor de los resultados alcanzados. Bolivia nada a contracorriente, pero lejos de pactar con su verdugo, redobla la apuesta que tanto éxito le ha dado en los últimos años.

Fuente: Sergio Martín-Carrillo. CELAG

COLOMBIA

GAVIRIA OCAMPO: "CERCA DEL 40% DEL PRESUPUESTO DE COLOMBIA SE DESTINA A GUERRA Y DEUDA"

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la *Deuda* Pública en Colombia.

¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?

Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.

También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el *Banco Mundial*, que es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.

¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cual es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?

Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235.6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dolares; de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al *servicio de la deuda* pública interna y externa; al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40% del presupuesto colombiano se destina a guerra y deuda.

Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, a niñez, a salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5% porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dólares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.

Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares

Resulta apenas obvio que para el post-acuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza ni inclusión, ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.

¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?

Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años; fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dólares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dólares y de 36.000 millones en el 2006.

Argumentando que la crisis de 1998 fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dólares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la

deuda externa es el 40% del *PIB*, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dólares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.

¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del postacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?

El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20% y el 40% de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y, desde los años 90, también el endeudamiento interno.

Aunque para que la población aceptara el proceso de Paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares); y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del post-conflicto costará unos 80.000 millones de dólares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.

Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a la que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el postconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, el que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.

Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta, incrementó el IVA del 16 al 19%, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se va a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.

Fuente: <http://www.cadtm.org/>

ECUADOR

LA PASTILLA AZUL DE LENÍN BOLTAIRE MORENO

Nadie sabe cuál será el verdadero rostro del gobierno económico de Moreno. En principio no hubo paquetazos. Tampoco hubo políticas expansivas ni desarrollistas. Ni se ha avanzado en las promesas de campaña. Una síntesis apretada sobre el gobierno económico de Moreno solo permite afirmar esto, no hubo noticias.

No news, good news?

Se puede afirmar que la falta de novedades en el frente económico es una buena noticia. De hecho, el país pudo superar los problemas derivados de la caída de los precios de sus exportaciones y mantuvo la recuperación que el Gobierno heredó de la gestión anterior. Hoy Ecuador muestra un sostenido avance del PIB cercano al 4 % anual, un resultado muy envidiable que parece justificar el optimismo.

Sin embargo, siguiendo el famoso refrán que dice que “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas”, nada es mejor que basarse en la realidad para entenderla, por lo que es necesario analizar algunos indicios que nos muestran las preferencias económicas del gobierno de Moreno.

Hubo un importante recambio en el equipo económico, con la salida de figuras clave comprometidas con el proyecto desarrollista de la revolución ciudadana, como Patricio Rivera, entre otros.

Sabemos que desde el principio Moreno mostró sin complejos un discurso a favor del Estado mínimo anunciando reducciones salariales para algunos funcionarios y la intención de desprenderse de activos públicos como el traspaso al sector privado del dinero electrónico y la venta del avión presidencial.

Lenín también muestra un discurso de libre mercado, abrió la compuerta de las importaciones que están creciendo explosivamente igual que la deuda externa con la que lo financia. Esta tendencia es inconsistente y tarde o temprano demandará un ajuste. Sobre quién recaerá es aún una incógnita abierta a especulaciones, pero desde luego, no será sobre los importadores.

En el plano tributario también hay indicios de que se está desmontando la moderna estructura progresiva que tanto costó conseguir. Por ejemplo, con la exoneración del saldo de anticipo del impuesto a la renta para muchas empresas -que fue una de las bazas que permitió despetrolizar los ingresos del Estado ecuatoriano- y con la apuesta por profundizar los incentivos fiscales “a las empresas que inviertan contribuyendo al cambio de la matriz productiva” -a pesar de que los resultados mostrados por estos incentivos en Ecuador y en el mundo han sido nulos-. La eliminación del impuesto a la tierra rural, en un país donde la estructura “feudal” de la propiedad agrícola recomendaría hacer exactamente lo contrario, apunta en el mismo sentido. Lo mismo indica la propuesta de eliminar el impuesto a la plusvalía, que se fundamenta en el argumento falso de que perjudicará a los constructores cuando en realidad los beneficiará, ya que disminuye los precios de los terrenos, desalienta el uso financiero del suelo y abarata su uso productivo y residencial.

Las características de las reformas al Código de Trabajo, que se están filtrando antes de la consulta popular, también despiertan las alarmas. Básicamente se está proponiendo un plan de empleo basado en reducir la carga salarial para las empresas. De nuevo se interpreta al salario como un costo y no se tienen en cuenta los efectos expansivos que genera el consumo popular sobre el crecimiento. La ganancia de competitividad empresarial se logrará disminuyendo costos salariales a las empresas que en definitiva terminarán pagando el resto de la sociedad (el plan juvenil consistirá en que el Estado abonará la mitad del salario y con el plan Mi Primer Empleo el salario se pagará con deducciones al anticipo del impuesto a la renta). Se difundió que se crearán nuevas modalidades contractuales y si bien el Gobierno afirma que no implicarán retrocesos para los trabajadores, el ministro Ledesma dijo que estas nuevas modalidades solo serán efectivas para los nuevos contratos y no para los preexistentes (al punto que las empresas que cambien la modalidad contractual de sus trabajadores preexistentes serán severamente sancionadas). Es inevitable pensar que si las nuevas modalidades no implicasen retrocesos en los derechos laborales serían extensibles a los trabajadores con contratos preexistentes, porque de otra forma se generaría un perjuicio a favor de los nuevos contratados, por lo que no es difícil prever que el gobierno de Moreno avanza por el mismo camino que llevó a la emigración de millones de ecuatorianos. Ledesma dijo que quienes los critican deben analizar “qué hacemos con los desempleados en el

Ecuador” y explicó que “no sirve” la modalidad de empleo indefinido, a confesión de parte, relevo de prueba; el de Lenín no parece ser un gobierno para los trabajadores.

La realidad sugiere que habrá cambios significativos en la política económica de Ecuador. ¿Por qué estos cambios aún no se han realizado? Esa es la pregunta relevante.

Nuestra hipótesis es que hay algo que contiene las iniciativas del Gobierno: la amenaza del retorno de Rafael Correa. Si la consulta consigue el objetivo de proscribir a Correa, ese será el punto de partida de las políticas neoliberales en Ecuador. Si la consulta no consigue proscribir a Correa pero consigue aprobar la propuesta de darle a Moreno todos los poderes de contraloría del Estado, entonces la proscripción a Correa avanzará por la vía de las denuncias judiciales, a través de la conocida guerra jurídica o Lawfare como están haciendo todos los gobiernos conservadores en América Latina.

Como en la película Matrix, desde que asumió Moreno los ecuatorianos se encuentran en una realidad virtual, bajo el encantamiento del diálogo y la unidad nacional, no son capaces de distinguir la realidad que se les aproxima. La consulta será un momento definitivo, el nacimiento del verdadero Gobierno de Moreno. Tenemos la certeza de cuál será el giro que tomará el Gobierno de Lenín tras la consulta, lo que no sabemos es si los ecuatorianos y ecuatorianas optarán por tomar la píldora roja de la realidad o la azul de la ignorante ilusión.

Fuente: Guillermo Oglietti y Jhon Bigpear. CELAG

EL SALVADOR

ALIMENTACIÓN SALUDABLE SE EXPANDE POR LAS ESCUELAS SALVADOREÑAS

El programa Escuelas Sostenibles, impulsado inicialmente en 2013 en tres centros educativos del municipio rural de Atiquizaya, en el occidental departamento de Ahuachapán, logró superar las expectativas y ahora es un esfuerzo replicado en las 22 escuelas de la localidad, y en muchas otras del país.

“Con los 10 menús que hemos implementado aquí, hemos cambiado la expectativa de alimentación de los estudiantes”, explicó a IPS el director del Centro Educativo Cantón Pепенance, José Antonio Tespan, antes de la primera asamblea entre maestros y padres y madres de familia del año.

“Eso nos da la oportunidad de abrir nuevas puertas con otros gestores para impulsar proyectos más completos...han surgido familias que quieren tener un huerto escolar, y entramos con proyecto ya de huertos familiares en el municipio”: Ana Luisa Rodríguez.

Esa institución es una de las tres que arrancaron con el programa, y con el tiempo se convirtió en el buque insignia de la iniciativa.

Ahora se desarrolla en 10 de los 14 departamentos de El Salvador, e incluye a 40 de los 262 municipios y a 215 de las más de 3.000 escuelas ubicadas en el área rural, beneficiando a unos 73.000 estudiantes.

El proyecto contó desde el principio con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y con el financiamiento del gobierno de Brasil. Y pese a que terminó oficialmente en diciembre de 2017, seguirá adelante debido a la fortaleza alcanzada.

“Hubo un cambio de paradigma y se logró un modelo de escuela sostenible en Atiquizaya, como FAO fue un gusto haberlos acompañado”, dijo a IPS el representante de ese organismo en El Salvador, Alan González.

El Salvador forma parte del grupo de 13 países de la región que desde el 2009 conforman una iniciativa ejecutada por FAO y por el gobierno de Brasil, para extender el programa de escuelas sostenibles, adaptando los logros obtenidos por esa nación sudamericana con su Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Este país centroamericano con 6,5 millones de habitantes convive con graves problemas socioeconómicos, y la malnutrición de niños y niñas es una variable que ha estado presente por décadas.

La desnutrición crónica en El Salvador rondó 14 por ciento en 2014, en niños menores de cinco años, según la Encuesta Nacional de Salud de ese año, la referencia más actualizada. Eso supera el promedio latinoamericano, que es de 11,6 por ciento, según datos de 2015 de la Organización Mundial de la Salud.

Los estudiantes beneficiarios de la iniciativa reciben una comida complementaria a mitad de la mañana, elaborada con productos adquiridos a agricultores del área, como parte del componente “compras locales”, eje clave en la ejecución del proyecto.

Alumnas del Centro Escolar Cantón Pepenance, en el municipio de Atiquizaya, en el occidente de El Salvador, frente a uno de los refrigerios diarios que se brindan a los estudiantes, altamente nutritivos y elaborados con productos de agricultores locales. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

“Además de asegurar una alimentación nutritiva en nuestros estudiantes, estamos al mismo tiempo fortaleciendo la economía local”, aseguró Tespan, el director de la escuela de Pepenance, con 3.225 habitantes de los 34.000 que engloba Atiquizaya en los 13 cantones (aldeas o pequeños pueblos) que se diseminan por sus 67 kilómetros cuadrados.

Frutas, legumbres, hortalizas y huevos son combinados con entusiasmo por la cocinera del centro escolar, Rosa Delmy Fajardo, de 46 años, oriunda de Pepenance, quien ha logrado que sus platillos obtengan el visto bueno del alumnado.

Ella contó a IPS que de los 10 menús, uno no había visto ni probado nunca, el llamado arroz chino, a base de ese grano, al que se le agrega una torta de huevo, cortada en trocitos.

“Cuando hago ese arrasan con todo, y Hay niños que piden a sus mamás que les hagan arroz chino”, narró.

Agregó que tiene 11 años como encargada de la cocina de la escuela, pero tres de trabajar bajo los lineamientos nutricionales de FAO.

Antes de eso, el menú era menos nutritivo, pues solo se contaba con productos básicos como aceite, arroz, frijoles, azúcar y leche, entre otros.

“Ahora no, tenemos todo lo que se necesita para que la comida lleve otro toque”, destacó.

El éxito alcanzado en Pepenance se vio reflejado en noviembre al participar y ser finalista del Premio Fundación Banco do Brasil, en la categoría internacional.

El certamen promueve las iniciativas de bajo costo con notable impacto social y con participación de las comunidades para el desarrollo sostenible. Las categorías de la premiación están alineadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas dentro de su Agenda 2030.

“Siento una gran alegría por ese premio, para mí es un gran logro, y por ello me siento orgullosa”, añadió Fajardo.

Mientras, la alcaldesa de Atiquizaya, Ana Luisa Rodríguez, dijo haberse sentido feliz y emocionada por el reconocimiento obtenido en Brasil, y con esperanza de traer más beneficios para ir fortaleciendo el programa.

“Eso nos da la oportunidad de abrir nuevas puertas con otros gestores para impulsar proyectos más completos...han surgido familias que quieren tener un huerto escolar, y entramos con proyecto ya de huertos familiares en el municipio”, acotó en diálogo con IPS.

Para la alcaldesa, parte de la clave del buen resultado obtenido en Pepenance ha sido el trabajo coordinado con todos los actores e instancias que han estado trabajando alrededor del mismo fin.

“Haber logrado ese trabajo intersectorial fue trascendental: se involucraron los padres en construcción de bodega, cocina y comedor, y ellos se empoderan también, son parte de ese proyecto”, aseguró.

Por su parte, González, el representante de FAO, subrayó que “en Atiquizaya hubo un involucramiento de la comunidad y de los actores locales”, vitales en alcanzar el resultado obtenido.

En septiembre del 2017, el representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Julio Berdergué, visitó Pepenance para conocer de cerca los logros obtenidos, y destacó que lo alcanzando en esta pequeña comunidad salvadoreña es un ejemplo a replicar en otros países.

Fuente: <http://www.ipsnoticias.net/>

HONDURAS

APOYADAS POR EEUU. FUERZAS DE SEGURIDAD SIGUEN ASESINANDO MANIFESTANTES

Las fuerzas de seguridad hondureñas, entrenadas y financiadas por EEUU, siguen disparando balas vivas a manifestantes a favor de democracia en Honduras. En estos días, fue asesinado Telmo Villareal, de 62 años, quien simplemente pasaba por una demostración el pasado sábado 20 de enero. También fue asesinado Ramón Fiallos, un coordinador local del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) la noche del 22 de enero.

Horas después fueron asesinados por fuerzas estatales, el 23 de enero, Geovanny Díaz Cárcamo, otro miembro del MADJ y activo en las protestas a favor de la democracia y la lucha de su Comunidad que defiende el Río Mezapa. Aquella misma mañana, otro manifestante a favor de la democracia, José Armando Mariona, de 21 años, fue asesinado.

SOA Watch condena los asesinatos brutales que está cometiendo el Estado hondureño y recordamos que ellos han sido asesinados por exigir su derecho básico a ser gobernados por un gobierno elegido democráticamente por la gente.

Mientras los militares y la policía abiertamente asesinan a civiles, como Telmo Villareal y Ramón Fiallos, y detienen a manifestantes, el sistema de justicia hondureño está procesando y encarcelado a manifestantes a favor de la democracia, a menudo con cargos falsos y arbitrarios; crece la lista de prisioneros políticos.

El activista Edwin Espinal, es uno de los prisioneros políticos. Fue detenido el viernes pasado por la noche y posteriormente acusado, irregularmente, dentro de una base militar.

Edwin ha sido un activista conocido en Honduras, desde el golpe militar 2009, cuando su compañera, Wendy Ávila (en la foto), fue muerta a consecuencia de intoxicación por gas lacrimógeno lanzado por fuerzas estatales. Mientras aquellos responsables de su muerte nunca han sido juzgados, Edwin repetidamente fue apuntado por el estado hondureño. En octubre 2013, la policía militar asaltó la casa de Edwin Espinal.

Mientras ahora los que asesinan a manifestantes, a plena luz del día, están libres y siguen imprudentemente disparando balas vivas a la muchedumbre; Edwin se encuentra encarcelado en una prisión de alta seguridad, bajo investigación por cargos de terrorismo y asociación ilícita en un proceso irregular.

Lamentablemente, Edwin es solamente uno de muchos otros prisioneros políticos encarcelados por el régimen hondureño en una tentativa de criminalizar la protesta social e intimidar a la población para que guarde silencio.

Muchas de las detenciones de manifestantes a favor de democracia son arbitrarias y donde las autoridades identifican a los líderes de las protestas y participantes de demostraciones para después ser detenidos y acusados injustamente por hechos donde no han participado.

La oposición públicamente ha acusado al gobierno de “infiltrar” las manifestaciones y de ser los verdaderos responsables del daño a la propiedad en una tentativa de criminalizar las protestas.

Numerosos manifestantes han sido encarcelados, y muchos han sido acusados de cargos serios que podrían conducir a años en la cárcel.

A pesar del riesgo de recibir un tiro por parte de la Policía Militar o de ser encarcelado, la gente, en toda Honduras, sigue fluyendo en las calles exigiendo su derecho de elegir democráticamente a su presidente.

En las palabras de Víctor Fernández, un líder con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, “estamos conscientes del riesgo implicado en la lucha y hace muchos años nosotros decidimos asumir esto. A pesar de los miedos naturales, no perdemos nuestro espíritu decidido para construir un nuevo país. Tampoco vamos a permitirles privarnos a nosotros de la alegría y de las aspiraciones de justicia y dignidad para todos”.

Llamamos a usted a:

- Compartir esta información con su comunidad y organización
- A llamar o escribir a las autoridades de su país para pedir el rechazo al fraude electoral que ha sucedido en Honduras y condenar al gobierno ilegal y criminal de Juan Orlando Hernández.
- A organizar actividades de solidaridad denunciando la grave crisis de Derechos Humanos que sigue viviendo Honduras desde el golpe de Estado del 2009 a la fecha y donde han sido asesinados cientos de activistas sociales y defensoras y defensores de Derechos Humanos.

(Fuente: SOA Watch)

MÉXICO

CRISIS TOTAL, AMLO Y EL 2018

Lo terrible de la crisis actual es que es funcional para el gran dinero. Las fortunas se siguen incrementando y creando, mientras México vive una crisis estructural, con cifras de violencia de guerra. Hay dos tiempos. Uno el de la normalidad del gran capital, que aprovecha los bajos salarios para invertir y tener grandes ganancias, la del saqueo de la riqueza nacional por mineras y otros mega-proyectos; la de los grupos delictivo que viven en la impunidad y las de la clase política que coordina este modelo y que saca jugosos dividendos de ello. El segundo, es el tiempo de la tragedia, de la muerte, del despojo y del miedo, en el que estamos sumergidos la mayoría de la población.

Dominan los del tiempo de la normalidad, ellos tienen el poder político y económico, importantes medios de manipulación y defraudación. Es un grupo compacto, que se ha mantenido y avanza a ya más de treinta años de su imposición. En 1988 se abrió un ciclo largo de luchas de resistencias, que han buscado alternativa al proyecto neoliberal, diversas luchas que, sin embargo, no han podido detener la avanzada neoliberal, ni tomar el poder.

En medio de la crisis total, hoy estamos en una batalla que parece decisiva, continuidad o cambio es el dilema. El movimiento alrededor de AMLO aparece, otra vez, con fuerza capaz de disputar el

poder a los neoliberales. Las dudas aparecen en los militantes y simpatizantes de MORENA y de la izquierda, el pragmatismo, las nuevas alianzas, el proyecto, su propuesta de gabinete, los discursos, las candidaturas, son algunos de los puntos que en algunos causan con justificación decepción, crítica y desencanto. Al mismo tiempo sectores de indecisos y antiguos contrarios se acercan a AMLO quien aumenta su fuerza alrededor del país. Los actos de precampaña parecen de cierre, las encuestas muestran un crecimiento de simpatías y hay adhesiones de diversos grupos, se consolida un movimiento con perspectivas de mayoría.

En la construcción de una mayoría hay riesgos, los oportunistas, el pragmatismo, el abandono de algunas banderas, la inclusión que desplaza, entre otros. La política de construcción de una mayoría a base, entre otras cosas, de alianzas con cualquiera y sin mayor trámite, tiene contradicciones difíciles de superar. El liderazgo de AMLO tiene la capacidad de aglutinar el movimiento opositor rumbo a la disputa política del 2018, en medio de sus contradicciones habrá que ver cuánto se puede avanzar.

Desde hace treinta años mucho ha cambiado, México se encuentra tal vez en la peor crisis de su historia. En este 2018 ante más de lo mismo, se perfila una alternativa pacífica que se propone "regenerar" a México. No es una alternativa completa y radical, sino una moderada que se propone terminar con la corrupción, pacificar al país y atender a una población lastimada por más de treinta años de neoliberalismo. Demandas urgentes en un país que se cae a pedazos.

Fuente: <http://www.blackmagazine.mx/>

NICARAGUA

POLÍTICAS DE TRUMP PROMUEVEN MÁS REMESAS HACIA NICARAGUA

Las remesas a Latinoamérica aumentaron en 2017 un 8%, hasta los 75.000 millones de dólares, algo que responde a factores como la incertidumbre en política migratoria de países como Estados Unidos, según el estudio anual de la organización Diálogo Interamericano... "Uno de los principales factores es el escenario político en Estados Unidos (...). Más de la mitad de los inmigrantes tienen miedo de la actual retórica. Esto tiene un efecto psicológico en los emisores", apuntó en la presentación del estudio Manuel Orozco, director del programa de remesas, migración y desarrollo de ese centro de estudios con sede en Washington.

... NICAS PREFIEREN MANDAR MÁS...

De hecho, este efecto se ve puede ver claramente plasmado en el hecho de que cuatro de los principales países beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), al que quiere poner fin el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hayan experimentado un notable crecimiento en el envío de remesas... Las remesas de Estados Unidos hacia Nicaragua, en vez de descender, aumentaron en 11%... En promedio per cápita los nicas enviaron 25 dólares más hacia sus familiares aquí.

Fuente: <http://www.informepastran.com/>

PANAMÁ

¡NEUTRALIDAD, SÍ!, ¡MANIOBRAS MILITARES NO!

El acuerdo de las maniobras militares ('Nuevos Horizontes 2018') entre Panamá y EE.UU., que se llevarán a cabo entre enero y julio y que le permitirá a 415 miembros de la Fuerza Aérea del Pentágono portar armas y gozar de privilegios diplomáticos, viola el Tratado de Neutralidad (TN), la Constitución Nacional (CN) y el Derecho Internacional (DI).

(1) El acuerdo viola el TN porque su Artículo V lo prohíbe: 'Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá (31 diciembre 1999), solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional'.

El TN está sujeto al Artículo 103 de la Carta de la ONU, que reza así: 'En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta'. Nuestra CN se somete al Artículo 103 al disponer en su Artículo 4 que, 'Panamá acata las normas del derecho Internacional.' 'Nuevos Horizontes' viola el TN ya que su Artículo V prohíbe fuerzas extranjeras en forma absoluta.

Si hubiese dudas, bastaría con remitirnos a las actas de las negociaciones del TN para entender la intención de los negociadores.

Por respeto al excanciller Juan Antonio Tack, principal negociador entre 1971 y diciembre de 1976 del Tratado del Canal (no del TN), y por mi parte, como redactor de la Declaración Conjunta Tack-Kissinger de 7 de febrero de 1974, marco de las negociaciones, advierto que en la misma no se menciona la palabra 'neutralidad' y que tampoco se puede inferir esta posibilidad, ya que tanto Torrijos como Tack y este servidor entendíamos que la neutralidad del Canal fue siempre muletilla y pretexto para intervenciones militares (Julio Yao, 'La Declaración Tack-Kissinger, Ensayo de Interpretación', Revista Tareas; Enrique Jaramillo Levi (comp.), El Canal... una Explosión en América, México, 1975).

La Declaración no contemplaba un TN. Por el contrario, el excanciller Tack sostuvo siempre que Panamá no autorizaría derechos residuales de defensa a EE.UU. después del 31 de diciembre de 1999. Fueron unas declaraciones de Kissinger y Sol Linowitz hacia fines de 1975, de que 'Panamá no debe hacerse ilusiones con un Canal independiente después de 2000 porque EE.UU. seguiría en control', lo que enfureció a Torrijos y a Tack, quienes me solicitaron que los refutara desde México, lo cual hice con apoyo del periodista Mario Velásquez.

(2) 'Nuevos Horizontes' también viola el TN porque la neutralidad descansa sobre dos pilares: la desmilitarización extranjera y el libre tránsito. (Julio Yao, "Panamá y el Régimen de Neutralidad", Conferencia Internacional de la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá, septiembre de 1997, (<http://www.seeci.net/revista/hemeroteca/Numero%205/5julioyao.htm>).

'Nuevos Horizontes' está también en conflicto con el TN porque su Artículo II expresa que 'Panamá declara la neutralidad del Canal 'para que el Canal y consecuentemente el Istmo de Panamá, no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo'.

Esto es justamente lo que pudiera ocurrir, ya que no es ningún secreto que EE.UU. lleva años preparando una intervención militar regional para derrocar al gobierno de Venezuela y destruir su revolución. Venezuela tendría legítimo derecho para atacar el Canal.

(3) 'Nuevos Horizontes' viola la CN porque desde la invasión de EE.UU. de 1989 'Panamá no tendrá ejército', aunque tiene un Servicio Nacional de Fronteras. Pero el SENAFRONT y la Fuerza

Pública solo tienen el deber constitucional de hacerle frente a una agresión externa y les está vedado participar en una intervención militar contra terceros Estados.

(4) 'Nuevos Horizontes' viola la CN porque forma parte de una decena de acuerdos mediante Notas Verbales que no fueron debatidas ni aprobadas por la Asamblea Legislativa porque violaban en extremo la soberanía y los intereses nacionales y, por ende, son inconstitucionales además de violatorios del DI.

(5) 'Nuevos Horizontes' viola el DI porque es una regla consagrada que no puede haber fuerzas extranjeras en un país que carece de ejército y que pueden ser utilizadas para atentar contra la soberanía de terceros Estados.

Es vergüenza y motivo de escándalo que un país invadido impunemente por EE.UU., se haga cómplice de la superpotencia más depredadora del mundo y sea, además, el único país de América Latina que se ha aliado a Washington contra un terrorismo originado a orillas del Potomac.

Fuente: Julio Yao Villalaz en <https://www.alainet.org/>

PERÚ

LA LUCHA POLÍTICA EN EL PERÚ, LA IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA

No creo necesario profundizar en la importancia que tiene, en la lucha política, quien logra tener la iniciativa, y así poder marcar el ritmo de la lucha, incidir en su curso e influenciar en su desenlace; caso contrario se va a la saga de los acontecimientos y cual veleta, nos movemos hacia donde va el viento, y sin una visión clara hacemos el juego a la oligarquía y terminamos votando por sus candidatos, defendiendo su democracia, y haciendo marchas, plantones, etc. Muy creativa, consecuente y revolucionariamente... dentro de los puntos controversiales que la clase dominante y sus operadores van periódicamente, soltando. Así, además del perrito simpático que mueve la colita, tenemos al que se va corriendo a recoger la pelotita que le tiran. Esto creo es un tema muy claro.

En los últimos tiempos, se ha notado claramente que la oligarquía y la derecha política son quienes deciden la agenda política y los temas en conflicto, y el movimiento popular ha ido a la saga de esta, haciendo una lucha nada más que reactiva, sin tener iniciativa, sin tener la capacidad de, a partir de un análisis serio de la realidad, plantear los temas estratégicos y originarios de aquellos que han provocado marchas y distintas manifestaciones de descontento popular.

Sin embargo, es necesario reconocer que en esta última "pelotita" (la del indulto a Fujimori), se ha ido planteando otros temas, como el "que se vayan todos", "nuevas elecciones", y "nueva constitución", siendo esta última un planteamiento muy esencial, que además no es nuevo, pues está presente desde hace por lo menos dos campañas electorales, lamentablemente solo mencionada en esos periodos electorales y no trabajada seriamente, creativa y consecuentemente entre estos periodos, mas bien abandonada como en el caso de Humala. Corriendo actualmente en peligro de quedarse nuevamente solo declarativa si es que ahora no se asume consciente y eficientemente como un proceso constituyente (es en este caso, lectura obligada la conferencia de Ferdinand Lasalle: "¿Qué es una constitución?" (http://norcolombia.ucoz.com/libros/Lassalle_Ferdinand-Que_Es_Una_Constitucion.pdf)), para lo cual esta debe dejar de ser un tema abstracto, declarativo y tiene que tener un contenido real y palpable.

Debemos, ante todo saber reconocer cuales son en realidad los temas controversiales y desde cual se puede orientar una lucha cada vez más amplia y convocante a diversos sectores sociales, pues si bien es cierto que, por ejemplo este frente contra el indulto, no puede rebasar más allá del tema

aglutinante so riesgo de estrecharse y limitarse, también es cierto que sumar no siempre es acumular fuerzas, es necesario mas bien definir objetivos claros, primarios, irrenunciables, aunque sea disminuyendo cantidad, pero aumentando en calidad, luego esta se vuelve mucho más atractiva y aglutinante. Para esto ayuda acudir al reporte de conflictos sociales emitido mensualmente por la Defensoría del Pueblo (<https://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/48reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-166---dic.pdf>), ahí veremos por ejemplo, que en el mes de diciembre del 2017 se han reportado 169 conflictos sociales, de los cuales 120 son los denominados conflictos “socio ambientales”; siendo esta la proporción de los últimos años, no es este un tema a tener en cuenta?. No están ahí, en esos conflictos activos y latentes el núcleo central de las luchas sociales, e incluso el clima necesario para que surjan lideres honestos, comprometidos y representativos de todo el pueblo peruano?, quien centraliza todas esas luchas?, no debería la CGTP, ser la llamada a hacerlo?, finalmente, siendo estos temas socio ambientales relacionados al tema de la explotación de los recursos naturales, por qué se permite que se confinen a la denominación arriba mencionada, y no se les tome como un conflicto económico y político, estructural, que tiene que ver con el modelo y sistema económico, y que nos concierne y afecta no solo a las poblaciones aledañas sino a todos los peruanos?. A partir de un análisis profundo de este tema, además de ser finalmente un tema central, pues es sobre los recursos generados por esta actividad sobre los que se hace la rapiña, sobre las migajas que nos dejan y que son el botín de las ratas y ratoncillos (presidentes y ministros, alcaldes provinciales y distritales), debemos precisar finalmente, cuánto realmente invierten los concesionarios, cuánto realmente dejan por todo concepto (canon, sobre canon, regalías, tributos, etc.), qué se hace con estos recursos y qué se podría hacer si tendríamos soberanía sobre los mismos?; y, principalmente: Cuánto son las utilidades de estos consorcios?, que sería cuantificar a cuánto asciende el saqueo, que dura ya casi 500 años?.

Finalmente, para dar impulso y asumir el proceso constituyente al cual se está convocando, planteo que se debe centrar este, sin dejar de lado otros; en 3 temas principales:

- 1.- El régimen de la explotación de los recursos naturales.
- 2.- La democracia, cómo debe ampliarse la participación consciente de la población en general, no solo los ciudadanos, pues es este un tema que concierne a todos incluidos los menores de edad que de seguro tienen también algo que decir.
- 3.- La gestión pública, y el control y participación de la población en general sobre esta actividad que incide en el destino y vida personal y familiar de cada peruano.

Sobre estos temas que se pronuncien todos desde su perspectiva, sobre estos temas que cada corriente de pensamiento, posición política, partidos, movimiento, frente, sindicatos, clubes, y toda la sociedad civil en general, digan lo que tengan que decir de cara a la gente, que se abra la confrontación política, que se movilice las fuerzas populares, se modifiquen la correlación de fuerzas y las relaciones de poder entre los sectores sociales, y finalmente se decidan los cambios que hay que hacer para que se abran en la patria las grandes alamedas de paz, progreso y desarrollo, que solo se dan en un contexto donde las personas tienen desarrollados su sentido de pertenencia y su instinto de soberanía y dignidad.

Fuente: Fernando Meza (Rebellion.org)

VENEZUELA

¿ESTÁ EN MARCHA LA FASE FINAL DEL ASEDIO A VENEZUELA?

Germán Gorraiz López. TeleSur.

Tras la fachada neoliberal de la Alianza del Pacífico se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica cuya finalidad última sería dinamitar el proyecto político-integracionista representado por la UNASUR e intensificar la política de aislamiento de los Gobiernos progresista-populista de la región, en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución Bolivariana (Chávez) así como finiquitar el proyecto integrador económico del MERCOSUR, proceso de integración económica creado en 1991 tras la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay al que posteriormente se habría incorporado Venezuela como Estado parte, quedando Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Surinam y Guyana como “Estados asociados”.

Dicha estrategia fagocitadora tendría como objetivos a medio plazo aglutinar el Arco del Pacífico para integrar además a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá e incorporar por último al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) , siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria “ expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949). En dicho libro, Kent afirma que “ la guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: [...] armas [...] políticas y económicas. La clase de guerra en que se emplean [...] (son la) guerra política y la guerra económica.” Los fines de estos tipos de guerra fueron descritos por este autor de la siguiente manera: “en estas guerras no convencionales se trata de hacer dos cosas debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer” y más adelante añade que los instrumentos de la guerra económica “consisten en la zanahoria y el garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos, el ‘boicot’, el embargo y la lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro”, estrategia que tendría como sujeto de aplicación los Gobiernos de Chávez y Maduro.

EE.UU. tras las reservas de crudo venezolano

En la actualidad, el 45% de las importaciones de crudo de EE.UU. proceden de Oriente Medio y Norte de África pero la nueva geoestrategia energética pasaría por tener a Canadá como principal proveedor de crudo, estando proyectada la construcción del oleoducto Keystone XL para transportar el crudo canadiense hasta el Golfo de México lo que tendrá como efectos colaterales la progresiva disminución de importaciones de crudo procedentes de la OPEP, México, Colombia y Brasil. Asimismo, asistimos a la drástica reducción de sus compras a Venezuela con el objetivo inequívoco de lograr la asfixia económica del régimen de Maduro y fagocitar sus reservas de petróleo (según el Departamento de Energía de EE.UU. las ventas de crudo venezolano a EE.UU. serían de tan sólo de 500.000 bpd diarios frente a los cerca de 1,7 millones de bpd vendidos en 1998), lo que obligará a México y Venezuela a redireccionar sus exportaciones hacia China y la India con el agravante añadido de unos fletes prohibitivos al durar la travesía hasta China 45 días, en lugar de los 5 días que tardaba en llegar el crudo venezolano a EE.UU.

Respecto a Venezuela, la producción de crudo habría descendido a 1,7 millones bpd (su menor nivel desde 1989 según datos de la OPEP), por lo que necesita urgentemente nuevos hallazgos petrolíferos (de seguir el ritmo actual de producción podrían agotarse sus reservas probadas en el 2021), así como una urgente financiación para refinanciar una deuda de 60.000 millones \$. En consecuencia, Venezuela habría firmado un acuerdo por el que la empresa petro-química estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en 200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, (considerado el yacimiento petrolero más abundante del mundo) y la empresa nacional de hidrocarburos PDVSA estaría en negociaciones con la rusa Rosneft, la italiana Eni y la española Repsol para obtener los créditos

necesarios para realizar nuevos proyectos de crudo y gas. Recordar que Venezuela habría recibido con anterioridad préstamos por valor de 5.000 millones \$ de la rusa Rosneft a cambio de envíos de crudo y combustible, siendo en la actualidad deudor de unos 2.000 millones \$ que serán condonados por Putin, quien aprovechará la ocasión para convertirse en “socio estratégico” de Venezuela y reforzar la presencia de Rosneft en el mercado energético mundial. Asimismo, podríamos asistir al nacimiento de un nuevo cártel energético pilotado por Rusia que utilizaría el petroyuán en las transacciones comerciales para luego utilizarlas para incrementar sus reservas de oro y así adquirir preeminencia frente al dólar en las operaciones financieras internacionales, dentro de la ofensiva de Putin para acabar con el papel del dólar como patrón monetario mundial tras la imposición por parte de EE.UU. de nuevas sanciones contra Rusia, todo lo cual sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EE.UU. cuyo objetivo inequívoco sería secar las fuentes energéticas de China.

La ofensiva de Tillerson contra Maduro

EE.UU. quiere evitar a toda costa que Maduro sea reelegido en las próximas Elecciones Presidenciales a celebrar antes del 30 de abril en la certeza de que sería elegido Presidente hasta el 2025 dada la división y falta de liderazgo de la oposición, por lo que procederá a la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pago. En este contexto deberemos incluir el anuncio de sanciones de la UE a Venezuela y de la posible retirada de todos sus embajadores en solidaridad con España tras la expulsión de su embajador. Asimismo, EEUU y los países de corte neoliberal latinoamericanos (Argentina, México, Perú y Colombia) han expresado su intención de no reconocer los resultados de las próximas elecciones, lo que convertiría el nuevo Mandato Presidencial de Maduro en un “paria internacional”, contando únicamente con el apoyo político de los países del ALBA.

Rex Tillerson se habría convertido en la némesis de Maduro y continúa con su cruzada emprendida en el 2007 para finiquitar el legado chavista. Así, la decisión de Maduro de confiscar la planta de General Motors, fue vista por la Administración Trump como un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses, escenario que será aprovechado por el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, antiguo Presidente y Consejero Delegado de Exxon Mobil cuando fue nacionalizada en el 2007 por Hugo Chávez, para intentar un golpe de mano contra Maduro. Exxon Mobil formaría parte de la Cuarta Rama del Gobierno de EE.UU., verdadero Poder en la sombra que toma las decisiones en política exterior y a instancias de Tillerson, la revolución chavista ya fue declarada “enemiga peligrosa de EE.UU”.

Asimismo, en unas declaraciones del pasado verano, Tillerson afirmó que “Estamos evaluando nuestras opciones políticas, revisando lo que podemos hacer para crear un cambio de condiciones a partir de las cuales, Maduro decida que no tiene futuro y decida dejar el Poder por su propia cuenta o que podamos regresar los procesos constitucionales a su Constitución”, toda una declaración de intenciones para impedir que Maduro sea reelegido en las próximas elecciones Presidenciales. Así, Tillerson iniciará en Febrero una gira por México, Argentina, Perú y Colombia bajo el argumento de “promover un hemisferio seguro y solicitar una mayor atención regional a la crisis en Venezuela” que podría concluir en la prevista Cumbre de la OEA en Perú con la implementación de sanciones contra Venezuela de los países que lo circundan para convertirla en “territorio asediado y presto para ser fagocitado”

Así, tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora basada en el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la obscena especulación, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana, la toma de las calles por la oposición y la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pagos, estaríamos asistiendo a la fase final de la trama para lograr la defenestración de Maduro. La paternidad de dicha trama sería atribuible a la CIA y la excusa legal será la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que declara “que los pueblos de América Latina tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”, lo que dará pie legal a EE.UU. a intervenir en

cualquier país del llamado “patio trasero” cuando estime que “son negados los derechos universales o cuando la independencia de la justicia o la prensa esté amenazada” y contará con la inestimable ayuda logística de Colombia, convertida en el portaaviones continental de EE.UU. para lograr que Venezuela vuelva a la senda de las “democracias tuteladas por EE.UU.”

Fuente: <https://www.telesurtv.net/>

LA MESA DE DIÁLOGO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA.

Prensa embajada venezolana en España. 14-01-2018.

Desde el inicio de su ejercicio como jefe de Estado en 2013, el presidente Nicolás Maduro ha realizado 338 llamados al diálogo con toda la oposición venezolana, a fin de superar las diferencias por la vía política y erradicar fórmulas violentas e inconstitucionales emprendidas por algunos sectores contrarios al gobierno.

En la actualidad, el proceso de diálogo se desarrolla en República Dominicana, acompañado por el presidente de este país, Danilo Medina; el ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; y representantes de los gobiernos de Nicaragua, México, Chile, Bolivia y San Vicente y Las Granadinas.

El 16/11/17 se celebró un primer encuentro preparatorio en el que se consensuaron por ambas partes seis puntos de agenda, que fueron debatidos por las delegaciones el 1 y 2 de diciembre. El 15/12/17, se discutió la operatividad -límites y mecanismos- de los seis puntos que se han venido tratando en los encuentros anteriores: Comisión de la Verdad, garantías económicas, garantías políticas y electorales, reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, equilibrio institucional, y situación económica y social.

El proceso de diálogo por la paz entre el Gobierno y la oposición venezolana continuó el 11 y 12 de enero en Santo Domingo, retomando los seis puntos de agenda, y con el objetivo de avanzar en un cierre en el que prevalezca el entendimiento y la paz entre ambas partes.

La oposición, agrupada en la llamada Mesa de Unidad (MUD), se muestra fuertemente dividida en su participación en el Diálogo, al punto de que algunos sectores continúan torpedeando cualquier posibilidad de entendimiento. Los partidos que están participando más activamente en el diálogo, son acusados de ser instrumentales al Gobierno, deslegitimando el ejercicio del pluralismo democrático

El 6/1/18, el diputado opositor del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Timoteo Zambrano, anunció su renuncia a las reuniones del diálogo a través de una carta en la que denuncia que ha sido señalado como supuesto colaboracionista con el gobierno por su disposición al diálogo, lo que conllevó a que diversos integrantes de la MUD desaconsejaran su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional. El mismo 6/1, el presidente Maduro invitó al recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza (UNT), a la Mesa de Diálogo. Sin embargo, Barboza ha respondido no sólo negándose sino promoviendo acuerdos en el Parlamento (aun en desacato judicial) para boicotear todas las iniciativas del Ejecutivo.

El 10/1, dirigentes de Voluntad Popular amenazaron públicamente con retomar la agenda de agitación en las calles “si el diálogo fracasa”. El dirigente de Primero Justicia, Ramón Muchacho, afirmó el 5/1 que “la presión internacional lo que tiene que hacer es dejar a Maduro sin dinero, hacer un cerco financiero (...) Tal presión económica le permitiría a la oposición generar un momento maravilloso para ir a las calles y de la mano de la comunidad internacional provocar una salida, que yo dudo sea democrática”.

Cabe recordar que está previsto constitucionalmente que en 2018 se celebren elecciones presidenciales, lo que atiza las disputas internas de la oposición, máxime al haber sufrido tres serios reveses electorales en 2017. Los sectores más extremistas, en este contexto, siguen

apelando al desconocimiento de las instituciones del Estado, incluyendo los procesos electorales, y se mantienen en la dinámica de aumentar la presión dentro y fuera del país con la guerra económica y las sanciones internacionales.